

Capítulo 5

Top secret

Los cómplices del Golpe y los aportes de los documentos desclasificados de la embajada norteamericana

Gonzalo Sanz Cerbino y Melina Cazabat

Toda aquella persona interesada en develar lo que aún no se sabe de la última dictadura militar argentina recibió con expectativa la desclasificación de documentos que Obama prometió en su visita al país en marzo de 2016. Lo que no todos saben es que no es la primera vez que salen a la luz este tipo de documentos. A fines de los años noventa, la prensa argentina dio a conocer algunos de los cables diplomáticos del período 1976-1983. Posteriormente, el Departamento de Estado norteamericano desclasificó más de 4.500 documentos (el cuádruple de los que ahora salen a la luz por el acuerdo Obama-Macri) y, más recientemente, WikiLeaks puso muchos más en línea. Algunos de esos documentos han sido traducidos y publicados, pero el grueso aún espera difusión (Novaro, 2011). Es probable que este déficit esté relacionado con lo que han sido las líneas de interpretación dominantes en relación a la última dictadura. Problemas como la complicidad civil con la masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas, tema sobre el que los partes de la embajada podrían echar luz, recién han comenzado a trabajarse, muy parcialmente, en los últimos años.

En el apéndice de esta publicación la cátedra pone a disposición del lector una selección de documentos de la embajada norteamericana en Buenos Aires, muchos de ellos traducidos por primera vez al castellano, que publicamos como apéndice. Se trata de una selección de documentos que develan la complicidad de empresarios, dirigentes políticos y las altas jerarquías de la Iglesia Católica con el Golpe y la masacre que le siguió. En este capítulo analizamos las líneas de análisis dominantes en los estudios sobre la última dictadura, que han relegado a un segundo plano los problemas aquí abordados, y presentamos una sucinta reconstrucción de la conspiración golpista, dando cuenta de la participación de todos los involucrados, lo que brinda el marco de contextualización necesario para abordar la documentación presentada en el apéndice.

La dictadura, de un prólogo a otro

Durante la década de 1980 y hasta bien entrada la de 1990, el grueso de los estudios sobre la dictadura adhirió y reforzó una línea de interpretación que era el resultado de la derrota de las fuerzas revolucionarias en los años setenta. Esa interpretación no solo escondía bajo la alfombra el compromiso militante de miles de desaparecidos, eliminando como elemento explicativo del Golpe el nivel alcanzado por la lucha revolucionaria, sino que al mismo tiempo descargaba la responsabilidad por la masacre exclusivamente sobre la cúpula de las Fuerzas Armadas, salvando la ropa de sus cómplices civiles. Era una explicación que se adecuaba a los nuevos tiempos democráticos, donde los que habían luchado por el cambio revolucionario quedaban reducidos a “víctimas inocentes” o “violentos guerrilleros” que con su accionar alimentaron al “demonio militar”, y quienes

habían impulsado el golpe se beneficiaban de un manto de silencio. Se trataba de una explicación funcional a la reconstitución de la hegemonía burguesa sobre la base del “consenso” democrático, que despojaba al régimen de sus anclajes clasistas al mismo tiempo que borraba de la historia a quienes habían luchado por su transformación. Esa explicación quedó plasmada en el prólogo del *Nunca más*, y devino en sentido común de la mano del cine, los medios de comunicación y los estudios académicos, que rara vez fueron más allá del análisis de la mecánica represiva del Proceso o de la “espiral de violencia” que lo habría precedido. Dado que en ese prólogo es donde encontramos la versión más acabada de esta explicación, resulta conveniente volver sobre sus líneas.

Entre fines de los años sesenta y mediados de los setenta, la sociedad argentina se partió en dos. El ciclo insurreccional abierto tras el Cordobazo y la creciente influencia de la izquierda en importantes capas del proletariado y la pequeña burguesía daban cuenta de la apertura de un proceso revolucionario y el surgimiento de una fuerza social revolucionaria. La clase dominante reaccionó intentando contener el ascenso de la lucha de clases por todos los medios a su alcance, lo que generó las condiciones de una guerra civil. Sin embargo, la explicación elaborada tras la restauración democrática de 1983, conocida como “teoría de los dos demonios” y plasmada en el prólogo del *Nunca más*, despojaba a los bandos enfrentados de cualquier tipo de lazo con el resto de la sociedad. Según el prólogo, “durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda” (CONADEP, 1984). De esta manera, el amplio campo de los que lucharon por una transformación revolucionaria quedaba reducido a lo que fue tan solo una expresión minoritaria: la guerrilla. Eran “violentos” que

sembraban un “terror” inadmisible bajo los parámetros de la democracia burguesa. Pero como la realidad que brotaba en las denuncias sobre torturas y campos de concentración, en los que no solo cayeron “guerrilleros”, sino cientos de militantes revolucionarios que nunca empuñaron un arma, se empeñaba en contradecir la explicación sobre el “primer demonio”, la teoría debía recurrir a argumentos adicionales. De esta manera, se trazaba una división entre los “guerrilleros” y las “víctimas inocentes” que cayeron en manos de la represión por la “irracionalidad” y la “barbarie” del “segundo demonio”:

... Se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpables de nada; porque la lucha contra los “subversivos”, con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible... [Alcanzaba] desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. (CONADEP, 1984)

Esta operación tuvo su correlato en la forma en que la CONADEP seleccionó y presentó los testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos que nutrieron el *Nunca más*. La pertenencia a organizaciones políticas era un dato ausente en los testimonios, que remarcaban, por un lado, los rasgos que detonaban la vulnerabilidad y la “inocencia” de las víctimas (las vejaciones sufridas por mujeres embarazadas o adolescentes, entre otros) y, por otro, el trato “bárbaro” que recibieron de sus captores (Izaguirre, 1998; Vezzetti, 2002). De esta manera, se descalificaba a todo el campo de la militancia revolucionaria, unos por su violencia irracional,

otros por su ingenuo idealismo. La revolución social desaparecía del horizonte de lo posible o lo aceptable. Se desdibujaban, en la misma operación, las verdaderas causas del Golpe: desarticular una amplia alianza social que había puesto en cuestión la continuidad de las relaciones sociales capitalistas, las que la dictadura había defendido mediante la coerción y la democracia seguía sosteniendo mediante el consenso.

Coherentemente, la represión no podía ser otra cosa que una reacción injustificada e irracional de un puñado de locos. El “segundo demonio” empezaba y terminaba en la cúpula de las Fuerzas Armadas, que “a los delitos de los terroristas [...] respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido”. La descripción de su accionar está plagada de adjetivos que denotan su supuesto carácter irracional: “bárbaros”, “sádicos”, “perversos”. La represión fue mucho más allá de lo necesario para poner en caja al “primer demonio”, no solo porque alcanzó a miles de “víctimas inocentes”, sino porque para combatir al “terror de extrema izquierda” no habría sido necesario abandonar “los principios del derecho” (CONADEP, 1984).

De esta manera, los enfrentamientos de los años setenta quedan reducidos a la mera violencia, al combate irracional entre “dos demonios” que se habían puesto por encima de la “sociedad”. Siguiendo esta lógica, la mayoría de los estudios académicos sobre el Golpe eludieron analizar el complejo fenómeno de la militancia de izquierda en los años setenta en aquellos ámbitos que no encajaban en el arquetipo de la “espiral de violencia”: su inserción en el movimiento obrero, el campo de la cultura o la universidad. También se relegó el estudio del entramado de complicidades civiles que impulsaron el golpe y contribuyeron al sostenimiento del gobierno militar. Los trabajos sobre el rol de los empresarios y los dirigentes políticos, eclesiásticos o sindicales durante

el Proceso resultaron escasos, incompletos o directamente inexistentes. De esta manera, se elaboró una explicación de los años setenta que resultaba funcional a la reconstrucción de la hegemonía burguesa sobre las nuevas bases “democráticas”. La burguesía y sus personeros, que apoyaron el Golpe para salvar al capitalismo, salían de la escena y se reciclaban en democracia. Y también se borraba de la escena el horizonte del cambio revolucionario. La única utopía posible era la democracia burguesa, que se construía en oposición a la violencia del pasado reciente:

... el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror... (CONADEP, 1984)

Pero las promesas incumplidas del paradigma socialdemócrata (la democracia no dio de comer, ni educó, ni curó) y un nuevo ascenso de la lucha de clases fueron relegando una explicación que resultaba anacrónica, al tiempo que en la lucha callejera se recuperaba la herencia de la militancia setentista que habían intentado ocultar. Así, desde mediados de los años noventa comenzaron a ser revisados los hechos del pasado reciente. La militancia revolucionaria en los setenta salía a la luz de la mano de libros testimoniales, revistas específicas y una renovada preocupación académica por este tópico. También comenzaron a aparecer trabajos que escudriñaban las complicidades civiles de la dictadura o la relación entre la represión y el proyecto económico encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz. La revisión del pasado bajo nuevos prismas acompañó el giro a la izquierda que vivía la sociedad argentina, con el ascenso

del movimiento piquetero en un ciclo que culminó en la insurrección del 2001.

Sin embargo, aunque los nuevos enfoques tomaban distancia de la “teoría de los dos demonios”, no resultaban necesariamente incompatibles con el orden social vigente. Las explicaciones clasistas siguieron siendo minoritarias, y el terreno que dejaban los “dos demonios” del alfonsinismo comenzó a ser ocupado por explicaciones que resultaban igualmente funcionales a reforzar la hegemonía burguesa. Aunque en los nuevos trabajos había una mayor preocupación por reconstruir la historia de la militancia setentista, el foco se posaba, casi con exclusividad, sobre las organizaciones peronistas. El estudio sobre la militancia de la izquierda marxista, armada y no armada, fue relegado a un segundo plano. De esta manera, se rescataba positivamente aquella militancia que no era antagónica a las relaciones sociales vigentes. La izquierda peronista habría luchado por la “justicia social”, por la “distribución del ingreso”: es decir, por reformas dentro de los marcos del capitalismo.

La misma parcialidad se observaba en relación al bando contrarrevolucionario, en donde solo una parte de los cómplices civiles de las Fuerzas Armadas fue analizada. En trabajos como los de Basualdo (2013) o Sidicaro (2002), el golpe aparecía impulsado por las capas más concentradas de la burguesía (la “oligarquía”, los “monopolios”, el capital extranjero), que tendrían por objetivo imponer un modelo económico liberal para desmontar la “Argentina industrial”. El Golpe, según esta visión, no se produjo para desarticular el proceso revolucionario, sino el modelo de país impulsado por la alianza peronista. Se iba imponiendo así un nuevo paradigma en el que, aunque se reconocía la existencia de una conflictividad social previa al Golpe, ella quedaba reducida al enfrentamiento entre dos alianzas burguesas, a dos “modelos” de capitalismo: liberalismo

versus proteccionismo industrial. Nuevamente, se trataba de una explicación funcional al sostenimiento de la hegemonía burguesa: los crímenes de la dictadura no habrían sido responsabilidad de una clase, la burguesía, sino de algunas de sus capas. Su contracara era una burguesía “buena”, democrática, que postulaba un modelo de país inclusivo, industrial, sin desocupación ni miseria.

Esta explicación de los setenta, que como veremos es tan inexacta como la “teoría de los dos demonios”, resultó funcional al personal político que se abocó a la reconstrucción de la hegemonía burguesa luego de la crisis de 2001. El kirchnerismo se apropió de estas explicaciones, elaboradas en los años noventa, para nutrir el “relato” con el que legitimó su acción de gobierno. Una versión edulcorada de la militancia setentista podía ser reivindicada por aquellos que se abocaban a reconstruir el capitalismo. Una lista parcial de cómplices de la dictadura podía servir para desprestigiar a los enemigos (mientras se ocultaban las relaciones *non sanctas* de los amigos). Estas explicaciones resultaron tan útiles a las nuevas tareas de la burguesía luego de 2001 que quedaron finalmente canonizadas en un nuevo prólogo al *Nunca más*, elaborado esta vez por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con motivo de los 30 años del Golpe. La “teoría de los dos demonios”, que el nuevo prólogo discutía, fue reemplazada por una nueva interpretación de la lucha de clases en los setenta, tan compatible como la anterior con los intereses de la clase dominante.

Según esta nueva historia oficial, el Golpe se hizo para imponer un modelo económico “neoliberal” y la masacre tenía por objetivo disuadir toda “resistencia” a este modelo:

La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasarlo con las conquistas

sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculcadas. [...] En la aplicación de estas políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos y sociales la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales. Disciplinar a la sociedad ahogando en sangre toda disidencia o contestación fue su propósito manifiesto. (CONADEP, 2006)

No había en los setenta ninguna amenaza al *status quo*, apenas movimientos sociales que defendían las “conquistas” del peronismo. Las contradicciones que motorizaron la conflictividad social previa al Golpe quedaron reducidas, de esa manera, al enfrentamiento entre peronistas (defensores del modelo industrialista y la justicia social) y neoliberales. Esta construcción permitió erigir al personal político que oficializó esta versión de la historia, el kirchnerismo, en los herederos de la militancia setentista y de la “lucha contra la impunidad” en democracia. Pudieron reivindicar, así, una versión “buena” del capitalismo, el peronismo, que defendería intereses “nacionales y populares”. Ese capitalismo “bueno” se construyó en oposición al “malo”: el neoliberalismo, que para imponerse debió recurrir al “terrorismo de Estado”.

Al igual que con la “teoría de los dos demonios”, estamos ante una explicación fragmentaria e interesada de los enfrentamientos de los setenta. Si la primera buscaba ocultar bajo la alfombra la militancia revolucionaria, la nueva historia oficial convertía a cada militante en defensor de un capitalismo “más justo”. Si el primer prólogo intentó borrar los lazos entre la clase dominante y su brazo armado, el nuevo prólogo se limitaba apenas a establecer las conexiones

de los militares con una parte de la burguesía, aquella que decía enfrentar el personal político encargado de reescribir esta historia. El problema de esta nueva “invención del pasado” es que el Golpe no se hizo contra el peronismo, sino que fue el resultado de su agotamiento: del agotamiento de un esquema económico (aquel que tocó fondo con el Rodrigazo) que pretendía seguir sosteniendo una industria ineficiente con transferencias de una renta agraria que se contraía; y del agotamiento de la relación entre la burguesía peronista, sus socios en los sindicatos (la “burocracia sindical”) y la clase obrera, a la que se pretendía hacer pagar el ajuste necesario para seguir sosteniendo un esquema económico inviable. El Cordobazo y la formación de una fuerza social revolucionaria son el resultado de este agotamiento. Esa es la razón por la que Perón volvió al país en 1973: para ponerse al frente de la represión de esa fuerza social revolucionaria, de la mano de la Triple A, y no para encabezar el “proceso de liberación”. El Golpe no se hizo contra el “proyecto peronista”, sino contra aquellas fracciones de la clase obrera y la pequeña burguesía que entraban en crisis con el reformismo para abrazar las ideas revolucionarias, que no solo impedían avanzar por la senda del ajuste, sino que podían poner en peligro la continuidad del orden capitalista. Por eso, como veremos a continuación, los militares también contaron entre sus aliados a dirigentes políticos, burócratas sindicales y empresarios peronistas. Dictadura y democracia (capitalistas) no son pares opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Como el sistema estaba en peligro, y los métodos propios de la democracia burguesa (el consenso de los explotados con la explotación) no permitían recomponer el orden necesario para relanzar la acumulación de capital, se recurrió a un régimen de excepción como lo es una dictadura.

Las causas profundas del Golpe

El Golpe de Estado de marzo de 1976 comenzó a gestarse varios meses antes, tras el fracaso del plan de ajuste del Ministro de Economía Celestino Rodrigo. Sin embargo, las causas profundas que lo explican estaban sobre la mesa desde mucho antes. A comienzos de los años cincuenta, el país entró en un ciclo errático en el que fases de crecimiento económico fueron sucedidas por estruendosas caídas. Entre fase y fase, aparecía el fenómeno de la crisis de balanza de pagos, por el desajuste entre los ingresos por exportaciones e importaciones, y la crisis fiscal. Su aparición obligaba a implementar devaluaciones y ajustes en un intento por descargar la crisis sobre el sector obrero, que vio sus salarios carcomidos por la inflación. Los vaivenes económicos se reflejaron en la evolución errática de la tasa de ganancia agraria e industrial, la productividad del trabajo y el PBI. La renta agraria, que operó en algún momento como factor de compensación y permitió el desarrollo de un entramado industrial poco competitivo, empezaba a mostrar límites para seguir sosteniendo este esquema.

El capitalismo argentino se enfrentaba, así, a una crisis de acumulación. La renta ya no alcanzaba para todos los sectores, lo que imponía la necesidad de realizar un ajuste. Los candidatos a pagarlo eran, por un lado, la clase obrera, que veía amenazado el nivel de vida conquistado durante las décadas previas, y, por otro, las capas más débiles de la burguesía industrial, que necesitaban para sostenerse de las transferencias de ingresos bajo distintas formas (subsidios, protección del mercado interno, crédito barato). La situación puso a la orden del día el enfrentamiento interburgués: las alianzas capitaneadas por la burguesía se alternaron en el comando de los resortes estatales, sin que ninguna pudiera sacar a flote el barco.

La incapacidad de la clase dominante para ofrecer una salida a la crisis derivó en un deterioro de las condiciones de vida para la clase obrera y la pequeña burguesía. Por eso, los lazos ideológicos y políticos que sustentaban la dominación comenzaron a debilitarse. Desde comienzos de los años sesenta, fueron apareciendo síntomas de una crisis hegemónica: crecimiento de los enfrentamientos sociales, aparición de organizaciones de izquierda que intentaban desarrollar la lucha armada, “peronización” de las clases medias, radicalización de los intelectuales y movilización de los estudiantes. El descontento eclosionó en mayo de 1969, cuando estalló en Córdoba una huelga general con características insurreccionales. Confluyeron en ella obreros y estudiantes, que arrastraron a la protesta callejera a buena parte de la población de la zona. La tendencia a la acción directa de las masas y la disposición al enfrentamiento contra el régimen no se agotaron en el Cordobazo: entre 1969 y 1973 se produjeron 17 insurrecciones en las que iba creciendo la influencia y el rol dirigente de la izquierda revolucionaria. Esta influencia se hacía notar, también, en el movimiento obrero, donde el “clasismo” comenzaba a rivalizar con la dirección tradicional peronista (la “burocracia sindical”). Todo ello daba cuenta del proceso de constitución, aún incipiente, de una nueva alianza que comenzaba a terciar en la disputa política. Aunque el programa y la estrategia todavía eran difusos, debatiéndose entre el socialismo revolucionario y variantes radicalizadas del peronismo, estas fracciones de la pequeña burguesía y de la clase obrera comenzaban a intervenir en el proceso político con independencia de las alternativas de poder encabezadas por la burguesía.

Las tendencias insurreccionales abiertas con el Cordobazo incidieron en el proceso político, lo que provocó una crisis de régimen. Los militares se vieron forzados a convocar

nuevamente a elecciones, y esta vez permitieron la participación del peronismo, proscrito durante 18 años. La salida elegida fue una estrategia consciente de ciertos sectores de la burguesía que buscaban descomprimir una situación social explosiva. Una vez en el gobierno, el peronismo intentó aquietar el conflicto social mediante un acuerdo capital-trabajo: el Pacto Social, suscripto por la Confederación General del Trabajo (CGT) y los industriales mercadointeristas nucleados en la Confederación General Económica (CGE). Además, avanzó en el disciplinamiento de la izquierda mediante herramientas legales (el endurecimiento de las leyes represivas) e ilegales (el armado de grupos parapoliciales, como la Triple A). Aprovechando el aumento coyuntural en los precios internacionales de granos y carnes, logró estabilizar momentáneamente las cuentas públicas, reforzar la protección para el entramado industrial —lo que le granjeó el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que terminó fusionándose con la CGE— y contener los reclamos de la burguesía rural.

El armado político del tercer peronismo se sostuvo mientras se mantuvo el flujo de divisas. Hacia fines de 1974, el deterioro de los términos de intercambio y el derrumbe de los precios agropecuarios dinamitaron las bases del plan económico, y el Ministro de Economía José Ber Gelbard terminó renunciando. 1975 fue un año marcado por la crisis económica y la descomposición de la alianza gobernante. La situación del agro se deterioró profundamente: los precios internacionales se derrumbaron sin que las cargas impositivas internas se redujeran en compensación. En este contexto, los opositores al gobierno ganaron terreno en las corporaciones rurales y de la crítica se pasó a la acción. Durante ese año, se impuso una modalidad de protesta que reconocía pocos antecedentes en la historia argentina: los “paros agrarios”, que fueron acompañados de

movilizaciones, cortes de ruta y actos de intimidación para garantizar el acatamiento mayoritario. Entre enero y junio de 1976 se realizaron once paros agrarios de alcance regional y tres de alcance nacional, lo que indicaba la existencia en la burguesía rural de una disposición al enfrentamiento nunca antes vista. Entre los dirigentes que impulsaron la movilización de los ruralistas se destacó la figura de Jorge Aguado, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que fue escalando posiciones hasta convertirse en el líder indiscutido de la oposición al gobierno peronista y una de las figuras centrales de la conspiración golpista. En paralelo, el deterioro de las cuentas públicas volvía a poner en la agenda la necesidad de un ajuste, que intentó aplicar sin éxito Rodrigo, quien asumió su cargo a mediados de 1975.

Un punto de inflexión

El programa que Rodrigo intentó aplicar consistía en un brusco descenso de los salarios reales, que apuntaba a relanzar la acumulación de capital mediante un gigantesco aumento de la explotación. La devaluación de la moneda y el fuerte aumento de precios y tarifas no serían acompañados por reajustes salariales. Sin embargo, pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera a ser la variable de ajuste. Rápidamente comenzaron a estallar huelgas parciales y movilizaciones contra lo que se conoció como “Rodrigazo”. Dirigida por cuadros de la izquierda revolucionaria, la resistencia al plan comenzó a darse órganos de coordinación que rebasaron la conducción de la “burocracia sindical” peronista. El fracaso del programa, que expresaba los intereses de las fracciones más concentradas y poderosas de la burguesía, ofició como punto de

inflexión al poner en evidencia que los marcos del régimen democrático no eran, en este contexto, los más adecuados para imponer una política económica que implicaba un férreo avance sobre las condiciones de vida de las masas.

Mientras que las corporaciones agropecuarias respaldaron el plan de ajuste, el sector industrial se mostró dividido. La división se procesó al interior de la CGE, que desde la fusión con la UIA aglutinaba al grueso de los industriales. Tras un mes sin pronunciarse sobre la nueva gestión económica, la dirección nacional de la CGE salió al cruce: acusó a Rodrigo de exagerar los alcances de la crisis para justificar la implementación de medidas impopulares. El balance del ministro, sin embargo, fue defendido por viejos dirigentes de la UIA integrados a la CGE que actuaban también en el Consejo Empresario Argentino (CEA). De esa forma, justificaron el ajuste implementado, que venía a reparar los “desaciertos” que achacaban a la gestión de Gelbard. De hecho, el CEA, formado en 1967, tendría un rol protagónico en la gestación del Golpe de marzo de 1976. Reunía a un puñado de empresarios (no más de treinta) que representaban a los capitales industriales más concentrados de la Argentina, tanto de origen nacional como extranjero. Lo integraban Techint y Acindar, dos de las metalúrgicas más importantes del país; Alpargatas, una de las más grandes fábricas de calzado y confección; automotrices como Fiat y Ford; las petroleras Astra, PASA y el Grupo Soldati; la química Duperial; las alimenticias Noel y Bunge y Born; y la papelería Celulosa, entre otras. Su influencia sobre el poder político, que se había opacado con el retorno del peronismo, se acrecentaría notablemente tras el Golpe: su presidente, Martínez de Hoz, sería el primer Ministro de Economía de la dictadura.¹

1 *La Nación*, 9, 12, 13 y 14-6-1975; *Cronista Comercial*, 14-6-1975 y 5-7-1975; *La Tierra*, 12-6-1975.

Los alineamientos en torno al programa de Rodrigo prefiguraron lo que sucedería tiempo después. La burguesía rural grande y chica, y los industriales medianos y grandes (el CEA y los ex dirigentes de la UIA incorporados a la CGE) respaldaron el plan de ajuste. El programa sólo fue cuestionado por algunos de los industriales más débiles, que dirigían la CGE. A pesar del importante respaldo alcanzado por el plan de Rodrigo entre la clase dominante, su gestión terminó en un fracaso. Tras cuarenta y cinco días, el ministro se vio forzado a renunciar en medio de una crisis política desatada por la ofensiva del movimiento obrero contra el plan de ajuste. La forma en que se abortó el cambio en los lineamientos económicos, con el movimiento obrero organizado imponiendo un límite al gobierno, encendió luces de alarma. Esa alarma aparecía claramente en los primeros balances que hicieron distintas fracciones de la burguesía de la crisis que terminó en el alejamiento de Rodrigo. La evaluación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), plasmada en un extenso documento difundido por la prensa, resulta representativa de lo que muchos sectores de la burguesía sostenían. Allí admitían los efectos recesivos y el “esfuerzo económico” que implicaba el “cambio de rumbo” para los asalariados, pero sostenían que los problemas serían menos graves si la crisis se enfrentaba con “realismo”:

El pueblo tiene que pagar ahora errores que se cometieron anteriormente en la conducción de la economía nacional, donde con palabras altaneras se desfiguró la realidad y se pretendió violar principios económicos elementales, sacrificando la Argentina a fantasías ideológicas que fracasaron en todos los países que se sometieron a ellas [...]. La oportunidad se ha desperdiciado en forma irresponsable, a pesar de nuestras advertencias y quizás porque quienes advertimos a las

autoridades éramos nosotros y no la extrema izquierda marxista, que con sus aliados ideológicos aplaudía esa política que llevó al país al desastre. (*La Nación*, 16-7-1975)

El balance era claro: el plan Rodrigo implicaba un ajuste duro pero necesario. Fueron los errores de las gestiones económicas anteriores los que habían llevado la situación a ese punto y la única forma de salir era mantener el rumbo elegido o, incluso, profundizarlo. La declaración no era solo un respaldo al plan, fuertemente cuestionado, sino una advertencia: no se podía volver atrás.

La salida de Rodrigo, como hemos dicho, constituyó un punto de inflexión. Desde este momento, la burguesía se lanzó a la acción con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno para forzar el ajuste que este no había logrado consolidar. La ofensiva se observó, por un lado, en la radicalización de los discursos, donde comenzaron a reiterarse con insistencia ciertos tópicos. En primer lugar, encontramos la caracterización de la situación como una crisis general —económica, política y social—, producto de los errores del gobierno. También aumentaron las referencias a la “subversión”, en la que se englobaba ya no solo a las organizaciones armadas, sino también al activismo obrero que actuaba bajo la dirección de la izquierda: la “guerrilla fabril”. Por último, se insistió una y otra vez en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un permanente llamado al “restablecimiento del orden”, con claras connotaciones golpistas. Aguado, dirigente de CARBAP, aparecía como el principal vocero de estas posiciones. Sus discursos, con amplia difusión en la prensa periódica, sintetizaron estas ideas que comenzaron a plasmarse en los pronunciamientos de todas las corporaciones empresarias. El discurso pronunciado en un acto el

24 de julio de 1975 es un ejemplo de ello. Allí caracterizó que la Nación se encontraba ante “una crisis general” que comprometía la existencia misma del poder del Estado, la posibilidad de una convivencia civilizada entre los argentinos y la estabilidad de las instituciones. Señaló que se vivían horas inciertas y difíciles para el país ya que “fuerzas extrañas a nuestro ser nacional, no tan ocultas pero de inconfesables designios están listas para alzarse con el botín de la República a poco que la ciudadanía no se defienda”. La alusión al fantasma de la “subversión” era clara. A continuación realizó un llamamiento a enfrentar la amenaza, luchando por devolver al país “tres factores fundamentales”: autoridad, seguridad y confianza (*La Nación*, 25-7-1975). Era este un discurso decididamente golpista, que presentaba una crisis de magnitudes históricas a la que el gobierno no podía ofrecer ningún tipo de salida. Y contenía una invocación final al restablecimiento de la “autoridad”, que era un guiño apenas velado a una nueva intervención de las Fuerzas Armadas en la política argentina.

La CGE, impulsora de la política económica que ahora aparecía en la picota, comenzó a experimentar una crisis interna producto del avance de las posiciones golpistas en la clase dominante. En agosto de 1975, las regionales de Salta y Tucumán cuestionaron a sus dirigentes nacionales, que volvían a apostar a un programa similar al que había fracasado de la mano de Gelbard. Las industrias alimenticias y los sectores agrarios que integraban la CGE, en medio de una crisis que afectaba particularmente a este sector, comenzaron a alejarse de la entidad. En abril de 1975 se desafiliaron varias empresas que dieron forma a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). En septiembre, dos entidades vinculadas con la actividad agropecuaria se escindieron de la CGE: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Unión General de Tamberos. A comienzos

de noviembre se desvinculó también la Federación de Productores Frutícolas de Río Negro. De esta forma, la CGE perdía a las últimas corporaciones de la burguesía rural que permanecían bajo su égida. La más importante de ellas, la Federación Agraria Argentina (FAA), se había desafiado a mediados de julio de 1975. Su alejamiento fue el resultado de un largo proceso de enfrentamiento con el gobierno nacional a raíz de los montos de renta capturados por el Estado, que la había llevado a confluir con CARBAP y SRA en los paros agrarios de ese año.

Luego del *impasse* de la gestión Rodrigo, FAA, CARBAP y SRA se lanzaron nuevamente a las calles con nuevos paros. Por su extensión, las nuevas medidas de protesta tuvieron un efecto desestabilizador sobre un gobierno golpeado por la crisis. A fines de agosto estas corporaciones convocaron a un paro ganadero nacional de once días, que se realizaría entre el 19 y el 29 de septiembre. Durante los días de paro prácticamente no se remitió hacienda a los mercados y se afectó la comercialización de leche. A su vez, los productores agropecuarios se movilizaron a bordo de sus máquinas y realizaron cortes de ruta para visibilizar la protesta. Durante algunas jornadas, las industrias y comercios de varios pueblos del interior cerraron sus puertas en solidaridad con la protesta ganadera. A poco de finalizada la medida, sus organizadores convocaron a un nuevo paro para el 24 de octubre que tendría una duración de 18 días. El anuncio repentino y su extensión tomaron por sorpresa al gobierno, que no pudo acumular *stocks* de hacienda. El masivo acatamiento produjo desabastecimiento y aumentos en los precios de la carne y sus sustitutos, que agravaron la inflación. A esto se sumaron los ya tradicionales cortes de ruta y las movilizaciones con maquinaria agrícola (*La Nación*, 26-9-1975, 31-10-1975 y 5-11-1975; *Cronista Comercial*, 25-9-1975; *La Tierra*, 25-9-1975, 16-10-1975 y 6-11-1975).

En paralelo a la ofensiva de la burguesía agropecuaria, se conformó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), integrada por SRA, CARBAP y COPAL, junto a la Unión Comercial Argentina (UCA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Cámara de Sociedades Anónimas (CAMSOCANON), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Bolsa de Comercio, que sirvió como punta de lanza de los empresarios golpistas. Ya para septiembre de 1975, las entidades adheridas llegaban casi a un centenar aunque no se habían sumado todavía los pequeños industriales, que continuaban bajo la órbita de la CGE. El capital comercial estaba representado por la UCA, entidad del comercio minorista, y CAC, en la que se nucleaban los importadores y los grandes grupos económicos que hacían pie en el comercio, la industria y las finanzas (Bunge y Born, Astra, Techint, Braun, Garavoglio y Zorraquín, Roberts, Shaw, Acindar, Mihanovich y Celulosa, entre otros). ADEBA reunía a los bancos de capital nacional y CAMARCO a las grandes constructoras con intereses ligados a la obra pública. También se encontraba representada la gran burguesía terrateniente (SRA y CARBAP) y la agroindustria (COPAL). Aunque el CEA no se había sumado como entidad, muchos de sus integrantes participaban en representación de las corporaciones que dirigían. En síntesis, podemos señalar que en el seno de APEGE actuaban algunos de los más encumbrados representantes de la burguesía local, que con sus aportes financiaban la actividad desplegada por el grupo.

Desde un principio, APEGE cuestionó el manejo de la crisis por parte del gobierno y fustigó a la CGE, a la que responsabilizaba de la situación imperante. Otro de los ejes de su intervención fue el llamado a “restablecer el orden”, una alocución con claras connotaciones represivas

en el que coincidían los núcleos golpistas. Un documento programático de la entidad difundido a fines de octubre de 1975 señalaba que el país se encontraba frente a una “gravísima crisis”, que no era sólo económica sino también ética, política y social: “La pérdida del principio de autoridad, la indisciplina, la inmoralidad, la incompetencia y la falta de seguridad para personas y bienes visibles son síntomas de un proceso de descomposición que urge remediar si deseamos sobrevivir como Nación” (*La Nación*, 23-10-1975). El intervencionismo estatal, la burocratización creciente y la subversión, supuestamente apañada por el gobierno, serían los causantes de esta situación.

Sin embargo, el principal reclamo de la entidad fue contra el “avance sindical”, que afectaría “gravemente la economía nacional”. En telegramas enviados a los ministros de Economía y Trabajo, solicitó imperativamente que “se garantice el normal desenvolvimiento de las actividades laborales y se ponga fin a la inseguridad jurídica, económica y personal en que se ven obligadas a desenvolverse las empresas”. En documentos posteriores, criticó el avance de los sindicatos en “expresa contravención de las normas constitucionales”, ostentando “privilegios irritantes”. La crisis, en las alocuciones de APEGE, parecía reducirse a estos núcleos de activistas sindicales decididos a defender los derechos laborales adquiridos: “... la iniciativa y la empresa privada están sucumbiendo [...] la productividad desciende a niveles alarmantes y [...] la propiedad se encuentra amenazada; [...] el país continúa su camino hacia el marxismo” (*La Nación*, 14-12-1975). El tema, a su vez, preocupaba sobremanera a los grandes industriales nucleados en el CEA. En una cena organizada en agosto de 1975, varios integrantes del Consejo (Carlos Dietl de PASA, César Polledo de la constructora homónima, Agostino Rocca de Techint y Eduardo Braun Cantilo del Grupo Braun) expresaron su inquietud

frente al problema. Las palabras de Braun Cantilo resultan representativas de lo expresado en aquel mitin. Señaló que se había creado “un vacío que impide el legítimo ejercicio de la autoridad en los ambientes industriales y no permite una normal producción”. Ello contribuía a crear “un clima asfixiante de inseguridad, de desconfianza y de temor, por falta de garantías suficientes en resguardo de vidas, bienes y el trabajo fructífero” (*Mercado*, 28-8-1975).

No podemos dejar de relacionar el énfasis puesto por estos núcleos empresarios en la activación sindical, que aparecía como el principal problema económico y social del país, con el rol que tuvieron las comisiones internas de fábrica en la organización de la movilización y la protesta que derrotó el plan de ajuste de Rodrigo. El dirigente radical Ricardo Balbín bautizó el fenómeno como “guerrilla fabril”, una metáfora clara de cómo los sectores empresarios percibían el problema y de cuáles eran los métodos que demandaban para solucionarlo. Así como las Fuerzas Armadas se estaban ocupando mediante el accionar represivo de la guerrilla urbana y rural, era menester aplicar los mismos métodos contra la “guerrilla fabril”. Apuntaban desembozadamente a la eliminación de los delegados sindicales combativos, cosa que no podía hacerse estando vigentes las garantías democráticas. Para eso hacía falta un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, una vez derrocado el gobierno, complacieron el reclamo empresario: el mismo día del Golpe se militarizaron las principales zonas industriales del país. A partir de entonces, “grupos de tareas” militares se hicieron presentes en las fábricas de mayor actividad sindical (entre otras, en las plantas de Ford, Acindar y Dálmine Siderca del grupo Techint, cuyos directivos integraban APEGE y el CEA) con listas que incluían los nombres de los principales activistas, que, según se constató tiempo después, los propios empresarios confeccionaron con la ayuda de la “burocracia sindical”.

Esos activistas fueron detenidos y muchos de ellos se convirtieron en “desaparecidos” (Basualdo, 2006; AA.VV., 2015). En los partes de la embajada norteamericana que presentamos en este libro, se menciona el caso de Cerámica Lozadur, donde más de una docena de activistas fueron secuestrados en noviembre de 1977. Aquel parte consigna que, más allá de lo que declararan los directivos de la empresa, su connivencia con el accionar represivo resultaba evidente.

Los conspiradores

Por su carácter secreto, resulta difícil reconstruir las relaciones entre estos núcleos empresarios con la cúpula de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hoy contamos con algunos elementos para hacerlo. La SRA, por ejemplo, mantuvo una reunión con el general Jorge Rafael Videla en noviembre de 1975. Allí, los ruralistas manifestaron su preocupación por el avance de la “subversión” en el ámbito agropecuario, a la que no se dudó en relacionar con la política del gobierno:

La baja rentabilidad al productor [...] constituye un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de concepciones extremistas; existen constancias de penetración subversiva a nivel de los productores medianos y pequeños, a través de entidades que constituyen ramas políticas del extremismo colectivista.

El enemigo mayor, la “subversión”, si no brotaba del propio gobierno, por lo menos no era enfrentado por él con decisión:

La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe una acción

definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos. (*Memoria y Balance de la Sociedad Rural Argentina, 1975-1976*)

La demanda que se desprende de este balance es clara: los militares debían alzarse con el poder para derrotar el “extremismo”.

Otro contacto central entre empresarios y generales golpistas ha trascendido gracias a uno de los documentos de la embajada norteamericana que presentamos en el apéndice. Un parte firmado por el embajador Hill fechado el 16 de marzo de 1976 da cuenta de una reunión que este mantuvo con el almirante Emilio Massera. En dicha reunión, Massera puso al tanto al embajador del inminente Golpe de Estado e intentó sondear sobre la actitud que tomaría el gobierno estadounidense. En particular, se mostró preocupado por la reacción de EE.UU. ante posibles violaciones a los derechos humanos, con lo que, entre líneas, le anticipaba la represión que se avecinaba. Estos planes estaban en conocimiento de quien acompañó al Almirante para secundarlo en tal delicada misión: Alejandro Shaw, uno de los titulares del banco homónimo, empresa que tenía representantes en la dirección de CAC y ADEBA, y por lo tanto tenía influencia sobre APEGE.

Por su parte, Aguado, decidido animador de APEGE, también contaba con aceitados vínculos con las Fuerzas Armadas, en particular con la facción liderada por el general Ibérico Saint Jean, quien, después del Golpe, ocuparía la gobernación de Buenos Aires. Aguado integró, junto a los juristas Jaime Smart y Alberto Rodríguez Varela (que había revistado también como Consejero de CAC), el círculo íntimo del General. Posteriormente, a ellos tres se les

adjudicó la redacción del documento *Un nuevo ciclo histórico argentino: del Proceso de Reorganización Nacional a la Tercera República*, con el que Saint Jean intervino en la discusión sobre los objetivos políticos de la dictadura en 1976. Con este documento, el grupo se postulaba como recambio de la facción comandada por el presidente Videla, a quien cuestionaba por su excesivo “politicismo” y por la “tibieza” en el accionar represivo. A Aguado se le atribuyó, también, injerencia en la estructuración del poder municipal en la provincia, en donde colocó a civiles y militares de su confianza. Las cuotas de poder acaparadas por Aguado le permitieron ubicar a cuadros de su confianza provenientes de CARBAP en las estructuras de gobierno provincial y nacional. El propio Aguado llegó a ocupar la cartera de Agricultura y Ganadería de la Nación durante la presidencia del general Roberto Viola, y la gobernación bonaerense bajo la presidencia del general Leopoldo Galtieri (Palomino, 1989: 117; Canelo, 2008; Palermo y Novaro, 2003: 169-260; Muleiro, 2011).

Sin embargo, el núcleo empresario de mayor influencia en los círculos militares parece haber sido el CEA. Tanto su presidente, Martínez de Hoz, como su director ejecutivo, Enrique Loncan (ejecutivo del Banco de Quilmes, consejero de CAC y dirigente de ADEBA), fueron activos animadores de las reuniones secretas en las que, con anterioridad al Golpe, se definió la política económica dictatorial. A ellas asistían importantes dirigentes empresarios, muchos de los cuales llegaron a ser funcionarios de la dictadura, junto a algunos de los generales que se hicieron con el poder en 1976. Entre los asiduos concurrentes a estas reuniones podemos contar a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y futuro funcionario dictatorial; Alberto Rodríguez Varela, consejero de CAC y futuro ministro de la dictadura; Horacio

García Belsunce, directivo de Acindar y dirigente de CAC; y Armando Braun, del grupo empresario homónimo, a su vez presidente de CAC y miembro del secretariado ejecutivo de APEGE.

Tras el Golpe, muchos de estos dirigentes fueron nombrados funcionarios. Martínez de Hoz fue Ministro de Economía entre 1976 y 1981, y lo acompañaron en su gestión Cadenas Madariaga en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y Juan Alemann, ligado a SRA, en la Secretaría de Hacienda. Su hermano, Roberto Alemann, Consejero de CAC, fue Ministro de Economía entre 1981 y 1982. Alberto Rodríguez Varela, otro consejero de CAC, ligado a Aguado y CARBAP, ocupó el cargo de Ministro de Justicia en 1978 y el de Rector de la Universidad de Buenos Aires en 1982. Pero no fueron estos dos últimos los únicos funcionarios provistos por CAC a la dictadura militar: 16 consejeros de esta entidad ocuparon cargos en el gobierno militar entre 1976 y 1983. La lista abarca desde subsecretarios y secretarios de Estado hasta embajadores, incluyendo también jueces de la Suprema Corte, directores de empresas y bancos públicos. A su vez, dos importantes dirigentes de la SRA, CRA y APEGE acompañaron a Cadenas Madariaga en su gestión al frente de la Secretaría de Agricultura: Alberto Ramón Mihura como Subsecretario de Ganadería y Jorge Zorreguieta como Subsecretario de Agricultura. Tras la salida de Cadenas Madariaga, Zorreguieta ocupó el puesto vacante, que desempeñó entre 1979 y 1981. Eduardo Oxenford, directivo de la textil Alpargatas y del Banco Francés, que integraba la dirección de CEA, ADEBA y APEGE, fue director de la petrolera estatal YPF entre 1978 y 1979, y Ministro de Industria y Minería en 1981. Francisco Soldati, titular del grupo homónimo, integrante de CEA y ADEBA, fue director del Banco Central de la República Argentina en 1976. Estos últimos son solo dos de los diez dirigentes de ADEBA

que ocuparon cargos jerárquicos en la administración pública entre 1976 y 1983 (Muleiro, 2011: 55-95; Palomino, 1988: 132; Itzcovitz, 1985).

Otro núcleo de empresarios con participación en la conspiración golpista es el de los “desarrollistas”, aquellos que se referenciaban en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) fundado poco antes por el ex presidente Arturo Frondizi y por Rogelio Frigerio. El desarrollismo tenía una influencia decisiva sobre dos corporaciones empresarias: la Unión Comercial Argentina y la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA). Ambas se habían sumado a APEGE desde el comienzo y aportaron dirigentes a su secretariado ejecutivo. En cada acto de la Asamblea, aparecían en la primera línea de combate contra el gobierno. El desarrollismo también tenía influjo sobre el diario *Clarín*, en donde Frigerio logró colocar un gerente que respondía al MID: Héctor Magnetto. El apoyo del matutino (y del resto de la prensa burguesa) a los golpistas es de sobra conocido, por lo que no vamos a abundar. Menos conocida es la relación del MID con la dictadura. Este partido no solo dio su apoyo abierto al Golpe, sino que calificó a la dictadura como la “manifestación de la revolución nacional”. Aportó, a su vez, dirigentes partidarios a la función pública. Es el caso de Oscar Camilión, que asumió como embajador en Brasil (Yannuzzi, 1996).

Como se puede observar, el apoyo de la clase dominante al Golpe fue prácticamente total. La burguesía agropecuaria, grande y chica, adhirió tempranamente a la conspiración y contribuyó a la desestabilización del gobierno peronista movilizándolo a sus bases en los “paros agrarios”, colocando dirigentes gremiales en APEGE y trabajando en conjunto con los militares golpistas en el diseño de las nuevas políticas. La burguesía comercial y financiera se sumó a APEGE y desde allí operó a favor del Golpe; también lo hicieron

algunos industriales medianos y pequeños (los que se organizaban en FEBA, por ejemplo). La burguesía industrial, aunque más fragmentada, también ofreció su respaldo mayoritario a la asonada. Los capitales más concentrados conspiraron desde sus posiciones en CAC o el CEA y luego aportaron sus cuadros a las filas del gobierno. Muchos de ellos también formaban parte de la CGE, a la que se habían integrado tras la fusión con la UIA. Como se verá a continuación, también operaron desde allí para arriar a los capitales de menor tamaño hacia la alianza golpista, lo que provocó en las semanas previas al Golpe el desmembramiento de la CGE, que contenía a su interior el único núcleo de empresarios que aún no se había alineado.

La ofensiva final

A fines de 1975, el clima estaba decididamente inclinado hacia la salida golpista: amplios sectores del empresariado (y sus representantes políticos) estaban convencidos de que esa era la única solución a una crisis que rebasaba por mucho lo económico y actuaban decididamente a favor del quiebre de la legalidad democrática. Sin embargo, faltaba resolver dos problemas: 1) algunos empresarios, que se nucleaban en la CGE, todavía respaldaban al gobierno democrático; y 2) no estaba clara la reacción que podían tener la clase obrera y la pequeña burguesía frente al Golpe. Si no se convencía a estos sectores de la gravedad de la situación y el *putsch* no aparecía como única alternativa frente al “caos”, los militares podían llegar a encontrar resistencias que hicieran peligrar sus planes. Para torcer la balanza en su favor, los golpistas iniciaron una última embestida contra el régimen democrático en diciembre de 1975, encabezada por APEGE.

Entre aquel diciembre y enero de 1976, la entidad publicó solicitadas en la prensa y convocó a una serie de asambleas en donde se exigió con vehemencia un ajuste económico y un disciplinamiento de los trabajadores que el gobierno, muy debilitado, no estaba en condiciones de realizar (*La Nación*, 20-12-1975 y 27-1-1976). La prensa misma caracterizaba que el objetivo de esta arremetida apuntaba a desplazar al propio gobierno: “Los sectores económicos adversos a la política de concertación nucleados en APEGE, han lanzado en los últimos días una enérgica ofensiva cuyo destinatario, más que la conducción económica, es el gobierno en su conjunto” (*Cronista Comercial*, 15-12-1975). Para forzar la situación, APEGE convocó a una medida de fuerza para el 16 de febrero: un *lockout* general. Ese día se paralizaría la actividad productiva en todo el país. A lo largo de las dos primeras semanas de febrero, fueron llegando adhesiones al *lockout* de distintas cámaras votadas en centenares de asambleas de empresarios en todo el país. Muchas de estas cámaras estaban adheridas a la CGE, pero desobedecieron la posición oficial de su dirección de no respaldar la medida. La central mercadointernista fue desmembrándose ante la ofensiva final de APEGE y se convirtió en una cáscara vacía en la antesala del Golpe. Según los organizadores, las cámaras que adhirieron al “paro empresario” llegaron finalmente a 1.200. Entre las empresas de todo el país la adhesión osciló entre el 80% y el 90% y las crónicas periodísticas hablan de un acatamiento mayoritario (*La Nación*, 14, 16 y 17-2-1976). El *lockout* tuvo un importante impacto político. El apoyo masivo de la burguesía al “paro empresario”, y por ende, al programa golpista impulsado por APEGE, quedó cabalmente demostrado. El gobierno democrático había perdido el apoyo de la clase dominante, lo que se constataba especialmente en la crisis que la convocatoria ocasionó en la CGE. A su vez, la medida sirvió también para medir el

respaldo que aún conservaba el gobierno en la clase obrera. La completa pasividad de los trabajadores, que no salieron a enfrentar el *lockout* golpista ni a defender al gobierno ni al régimen terminó de definir su suerte.² En suma, a inicios de 1976 se demostró que el Golpe tenía el respaldo de la clase dominante y se había obtenido, por lo menos, la neutralidad del resto de los sectores.

Por último, no podemos dejar de hacer mención a otros actores por fuera de los círculos empresarios que también fueron fundamentales en la consecución del movimiento golpista. En pleno *lockout*, se produjo un hecho significativo: COPAL, representante de la industria alimenticia, organizó una misa destinada a rendir homenaje a los “empresarios abatidos por la violencia”. El hecho ponía de manifiesto la complicidad de la jerarquía católica con los golpistas. Desde mediados de 1975, distintos prelados hicieron público su apoyo a la “lucha contra la subversión” encabezada por las Fuerzas Armadas. Algunos fueron más lejos, como el pro-viceario castrense Victorio Bonamín, quien en una homilía pronunciada en septiembre de 1975 frente a Viola, saludó a los militares “purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país”, y se preguntó: “¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función?” (Mignone, 1999: 24). La comunión entre curas y militares era tal que, en la noche previa al Golpe, Videla y Massera mantuvieron una reunión con las autoridades eclesiásticas en la sede del Episcopado. Luego del Golpe, el apoyo de la jerarquía eclesiástica, respaldada por la nunciatura papal, se expresó por múltiples vías: declaraciones públicas de apoyo, reuniones semanales con el Ejecutivo,

2 Se repite aquí, en forma más aguda, el cuadro que prevalecía antes de que el Golpe de 1955 acabara con la segunda presidencia de Perón, analizado por Marina Kabat en el segundo capítulo de este volumen.

fundamento espiritual a la Doctrina de Seguridad Nacional, “consuelo espiritual” para los torturadores y encubrimiento de los crímenes de la dictadura, entre otras (Dri, 2011). En el apéndice de esta publicación el lector encontrará algunos documentos que refieren a los servicios prestados por la jerarquía católica al gobierno dictatorial.

Así como el apoyo de la Iglesia resultó imprescindible para el sostenimiento del régimen militar, los partidos políticos burgueses también hicieron su aporte. A medida que la crisis de régimen avanzaba, los dirigentes políticos fueron decididos impulsores de la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión del conflicto interno. Desde el líder de la Unión Cívica Radical (UCR), Balbín, quien luego del Rodrigazo llamó a terminar con la “guerrilla fabril”, hasta el dirigente del Partido Justicialista (PJ) Ítalo Luder, quien estando en ejercicio de la presidencia de la Nación, firmó el decreto que ampliaba las tareas contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas a todo el país, con la orden de “aniquilar el accionar de elementos subversivos”. Estos dirigentes, tras intentar infructuosamente desplazar a Isabel Perón, terminaron apoyando el Golpe como única alternativa al “caos”. A lo largo de 1976 y 1977, la UCR y el PJ, entre otros partidos, dieron claras muestras de colaboración con la dictadura: aceptaron sin demasiadas reservas la suspensión de la actividad de los partidos políticos, concurrieron a las reuniones convocadas por el Ministro del Interior Albano Harguindeguy e incluso llegaron a respaldar abiertamente la represión. Juan Carlos Pugliese, presidente de la UCR de Buenos Aires, señaló, por ejemplo:

Los amigos de Córdoba nos dicen que Menéndez asume la responsabilidad personal de la represión [...]. La gente en Córdoba entiende que esto ha creado una sensación de paz. En algunos diarios del exterior se

ha escrito que Menéndez es duro, pero digamos una cosa, ¿hay algún militar que pueda no ser duro con la subversión? (Yannuzzi, 1996: 108)

Además, estas fuerzas llegaron a aportar importantes cuadros partidarios para cubrir puestos en distintas esferas del gobierno. Un caso paradigmático es el de Ricardo Yofre, abogado radical, que con la venia de Balbín asumió como subsecretario general de la presidencia en 1976, puesto en el que se hizo acompañar por otras figuras del radicalismo, como Virgilio Loíacono y José María Lladós. Sobre él, el lector encontrará información en el apéndice documental. A su vez, reconocidas figuras con trayectoria en sus partidos cubrieron puestos diplomáticos. Además del ya nombrado Camilión, están los casos de Héctor Hidalgo Solá (UCR), embajador en Venezuela; Francisco Moyano (Partido Demócrata Progresista, PDP), embajador en Colombia, y Américo Ghioldi (Partido Socialista Democrático, PSD), embajador en Portugal. Los partidos burgueses también contribuyeron a cubrir cargos en miles de municipios. Un informe de fines de 1978 indicaba que apenas un 10% de las intendencias habían sido cubiertas por militares, mientras que el 18,3% (310) se encontraba en manos de radicales y el 11,3% (192) en manos de peronistas. El resto se lo repartían otras fuerzas, como el MID, el PDP o partidos provinciales, o estaban encabezadas por individuos sin militancia conocida (Yannuzzi, 1996: 78-123; Quiroga, 2004: 70-135; Marín, 2003: 67-68; Seoane y Muleiro, 2001).

Como hemos intentado demostrar a lo largo de este trabajo, la trama de complicidades civiles que sostuvo a la última dictadura es compleja y extensa. Ni las Fuerzas Armadas constituyeron un “demonio” aislado de la sociedad ni sus cómplices se limitaron a poderosos empresarios trasnacionales y tecnócratas. El Golpe militar ejecutado

en marzo de 1976, y la masacre que le siguió, fue la reacción de una clase social, la burguesía, ante el peligro que constituía la organización y la lucha de los explotados por fuera de los marcos que ofrecía la propia clase dominante en un contexto que exigía el ajuste como único medio para recomponer la tasa de ganancia. Por eso, los vínculos de los militares golpistas con la burguesía no se limitan solo a algunos individuos o sectores solitarios. Casi todos los empresarios —industriales, agropecuarios y banqueros, grandes o chicos—, junto a sus representantes en los partidos, los sindicatos y la Iglesia, apoyaron y propiciaron el Golpe. Los documentos que presentamos en el apéndice, desclasificados recientemente por el gobierno norteamericano, contribuyen a develar algunos de los puntos oscuros de esta trama de complicidades.

Bibliografía

- AA.VV. (2015). *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad*, tomos 1 y 2. Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Basualdo, E. (2013). El legado dictatorial. El nuevo patrón de acumulación de capital, la desindustrialización y el ocaso de los trabajadores. En Verbitsky, H. y Bohoslavsky, J. P. (eds.), *Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura*, pp. 81-99. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Basualdo, V. (2006). Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. En *Engranajes*, núm. 5, pp. 1-21.
- Canelo, P. (2008). *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires, Prometeo.
- CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) (1984). *Nunca más*. Buenos Aires, Eudeba.
- _____ (2006). *Nunca más*. Buenos Aires, Eudeba.

- Dri, R. (2011). *La hegemonía de los cruzados: la Iglesia Católica y la dictadura militar*. Buenos Aires, Biblos.
- Iztcovitz, V. (1985). *Organizaciones corporativas del empresariado argentino: La Cámara Argentina de Comercio*. Buenos Aires, CISEA.
- Izaguirre, I. (1998). La memoria de la política y la política de la memoria en la Argentina. *Razón y Revolución*, núm. 4, pp. 69-79.
- Marín, J. C. (2003). *Los hechos armados*. Buenos Aires, PICASO-La Rosa Blindada.
- Mignone, E. (1999). *Iglesia y dictadura*. Buenos Aires, UNQ-Página/12.
- Muleiro, V. (2011). *1976. El golpe civil*. Buenos Aires, Planeta.
- Novaro, M. (2011). *Cables secretos*. Buenos Aires, Edhasa.
- Palermo, V. y Novaro, M. (2003). *La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática*. Buenos Aires, Paidós.
- Palomino, M. (1988). *Tradicón y poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*. Buenos Aires, CISEA.
- _____. (1989). *Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983*. Buenos Aires, CISEA.
- Quiroga, H. (2004). *El tiempo del "Proceso". Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*. Rosario, Homo Sapiens-Fundación Ross.
- Seoane, M. y Muleiro, V. (2001). *El dictador*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Sidicaro, R. (2002). *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Vezzetti, H. (2002). *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Yannuzzi, M. (1996). *Política y dictadura*. Rosario, Fundación Ross.